



**Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial**

Distr. general
5 de febrero de 2020
Español
Original: chino
Chino, español, francés e inglés
únicamente

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

**Información recibida de China sobre el seguimiento
de las observaciones finales relativas a sus informes
periódicos combinados 14º a 17º***

[Fecha de recepción: 8 de octubre de 2019]

* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.



Información recibida del Gobierno de China sobre el seguimiento de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Con respecto a las cuestiones planteadas en las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (“el Comité”), China ya ha dado algunas explicaciones en su informe al Comité sobre la aplicación de la Convención (CERD/C/CHN/14-17) y en sus respuestas a la lista de cuestiones del Comité (CERD/C/CHN/Q/14-17), así como en su diálogo interactivo con el Comité. En cumplimiento de la recomendación relativa al seguimiento que figura en el párrafo 61 de las observaciones finales del Comité (CERD/C/CHN/CO/14-17), el Gobierno de China responde a continuación a las preguntas formuladas en los párrafos 33 b), 42 a) a d), 42 f) a h) y 44 c) de las observaciones finales.

A. Número de organizaciones no gubernamentales que realizan actividades relacionadas con la Convención oficialmente registradas en China

El Gobierno de China siempre ha concedido gran importancia al papel que desempeña la sociedad civil en la lucha contra la discriminación racial y la protección de los derechos de las minorías étnicas. Actualmente hay casi 1.800 organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones relativas a las minorías étnicas registradas en el Ministerio de Asuntos Civiles. Esas organizaciones realizan actividades en esferas como la educación y la salud, la cultura y los deportes, la economía y el comercio, los intercambios internacionales y la investigación teórica, y desempeñan una función importante en la salvaguardia de los derechos y los intereses legítimos de las minorías étnicas y en la promoción de la igualdad, la unidad, la asistencia recíproca y el desarrollo armonioso de todos los grupos étnicos.

B. Cuestiones relacionadas con la Región Autónoma de Xinjiang Uighur

Durante el diálogo, los miembros del Comité se refirieron a la cuestión de los centros de formación y capacitación profesional de Xinjiang (en adelante los “centros de formación y capacitación”). A continuación, China proporcionará información sobre esos centros y otras cuestiones relativas a la Región Autónoma de Xinjiang Uighur.

El terrorismo y el extremismo son enemigos de las sociedades humanas, por lo que la lucha contra esos fenómenos es una responsabilidad que recae en toda la comunidad internacional. En China, Xinjiang es el principal escenario de la lucha contra el terrorismo y el extremismo, que desde hace un tiempo afectan profundamente a la región y suponen una grave amenaza para la vida y la seguridad de sus habitantes. Con arreglo al principio de que han de abordarse tanto los síntomas como las causas fundamentales de los problemas e integrando medidas preventivas con una respuesta enérgica, se han establecido en Xinjiang centros de capacitación y formación profesional, de acuerdo con lo previsto por ley, con el fin de eliminar los factores y las condiciones que favorecen la aparición y la propagación del terrorismo y el extremismo religioso. Así pues, China ha logrado reducir el número y la frecuencia de los incidentes terroristas y garantizar al mismo tiempo los derechos a la vida, la salud y el desarrollo de las personas de todos los grupos étnicos, lo cual representa una importante victoria en esta etapa de la lucha contra el terrorismo y el extremismo.

De conformidad con lo dispuesto en leyes y reglamentos como la Ley de Lucha contra el Terrorismo, las medidas adoptadas por la Región Autónoma de Xinjiang Uighur para aplicarla y los reglamentos de la Región Autónoma de Xinjiang Uighur relativos a la lucha contra el extremismo, se han establecido centros de formación y capacitación en

Xinjiang, con el fin de prestar asistencia e impartir instrucción. Actualmente, las personas admitidas en dichos centros se clasifican en tres categorías: la primera comprende a las personas que han sido incitadas o forzadas a participar en actividades terroristas o extremistas, o cuya participación no ha sido suficientemente grave para constituir un delito. La segunda categoría comprende a las personas que han sido incitadas, o forzadas a participar en actividades terroristas o extremistas, o que han participado en actividades terroristas o extremistas que suponían un peligro real pero no llegaron a causar un daño real, personas cuya intención no era suficientemente dolosa y que son capaces de reconocer su culpabilidad y expresar su arrepentimiento por los delitos cometidos y demuestran su disposición a recibir voluntariamente la formación, y respecto de las cuales no es necesario entablar acciones judiciales o se puede dictar sobreseimiento. La tercera categoría comprende a las personas que han sido declaradas culpables y condenadas por delitos terroristas o extremistas y que en el momento de su puesta en libertad siguen siendo consideradas una amenaza potencial para la sociedad, por lo que, por orden de los tribunales populares y de conformidad con la ley, deben recibir educación en los centros. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, se debe prestar asistencia a las personas de las categorías primera y tercera, educarlas y formarlas con miras a su reintegración. A las personas de la segunda categoría se les aplica una política de clemencia y severidad en materia de justicia penal, que consiste en castigar severamente al menor número posible de personas y rehabilitar a todas las que puedan serlo. A quienes reconocen su culpabilidad, expresan su arrepentimiento y aceptan voluntariamente la capacitación, se les proporciona asistencia y educación, una vez que se ha dictado una decisión de sobreseimiento en su favor, de conformidad con la ley. Todas esas personas reciben educación y formación profesional gratuitas, en forma de cursos centralizados, servicios de internado y capacitación práctica, y obtienen un certificado tras aprobar la evaluación final. Una vez obtenido el certificado, los alumnos pueden escoger un oficio o recibir ayuda de los departamentos competentes del gobierno regional para encontrar un puesto de trabajo. El número de personas que participan en esas actividades de educación y formación varía, pues constantemente llegan nuevos alumnos y se marchan otros. Esas actividades reciben el apoyo necesario y se llevan a cabo con eficacia, gracias a lo cual la mayor parte de los alumnos han cumplido los requisitos para finalizar con éxito la formación.

La labor de educación y capacitación que se está llevando a cabo en Xinjiang se ajusta a los principios básicos claramente definidos en las convenciones e iniciativas pertinentes de la comunidad internacional. En su calidad de miembro responsable de la comunidad internacional, China apoya activamente la función de dirección y coordinación de las Naciones Unidas en la cooperación internacional para la lucha contra el terrorismo, respeta estrictamente la Carta de las Naciones Unidas y otros principios y normas del derecho internacional, apoya la serie de resoluciones de lucha contra el terrorismo aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y promueve enérgicamente la plena aplicación de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo (A/RES/60/288). China se ha adherido a convenios internacionales de lucha contra el terrorismo como el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. La labor de educación y capacitación que se lleva a cabo en Xinjiang es la manifestación concreta de la forma en que China se basa en la experiencia de la comunidad internacional en materia de lucha contra el terrorismo y el extremismo y lleva a la práctica las iniciativas y las ideas de la comunidad internacional en esa materia.

Los centros de formación y capacitación son como escuelas. En respuesta a la necesidad práctica de combatir el terrorismo y el extremismo en Xinjiang, han establecido programas de enseñanza en los que se hace hincapié en el estudio del idioma nacional de China, el conocimiento de la ley, la adquisición de aptitudes profesionales y la desradicalización. Primero, se imparten cursos de lengua a los alumnos que no dominan la forma escrita y hablada del chino estándar. Los alumnos progresan con rapidez con la ayuda de especialistas en la enseñanza del chino, que utilizan materiales de enseñanza especializados y aplican métodos de enseñanza tradicionales. Segundo, se les imparten cursos para subsanar sus lagunas en lo que respecta al imperio de la ley. Gracias a esos

En los cursos los alumnos adquieren una comprensión más cabal de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y asimilan conceptos como la igualdad en el disfrute de los derechos y el respeto de las obligaciones, y aceptan que es preciso acatar la Constitución y las leyes y actuar de conformidad con los derechos y las obligaciones que establecen esos instrumentos. Tercero, la capacitación profesional tiene por objeto subsanar la falta de aptitudes profesionales de los alumnos y ayudarles a encontrar un empleo. En los centros de formación y capacitación se considera que la adquisición de competencias profesionales es un medio eficaz de ofrecer nuevas salidas laborales a los alumnos. Los cursos de capacitación se organizan en función de las necesidades y las condiciones de empleo locales. Se imparte una formación polivalente a los alumnos que lo deseen y reúnan las condiciones necesarias, de modo que al término de los cursos hayan adquirido una o dos competencias profesionales.

La labor de educación y capacitación que se lleva a cabo en Xinjiang es una medida de gobernanza social adoptada por el Gobierno de conformidad con la ley, que tiene por objeto garantizar la seguridad de la vida de las personas y la inviolabilidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al llevar a cabo esta labor, los centros de formación y capacitación aplican estrictamente las disposiciones de la Constitución y las leyes, y protegen los derechos fundamentales de los alumnos. La legislación china prohíbe expresamente toda práctica discriminatoria basada en criterios regionales, étnicos, religiosos y de otro tipo. Esta prohibición se ha aplicado plenamente en Xinjiang. Para determinar quiénes han de ser educados y rescatados, los centros de formación y capacitación se guían por un solo criterio, a saber, la comisión de infracciones o delitos relacionados con el terrorismo o el extremismo religioso, lo cual no tiene nada que ver con la región en que vivan esas personas, su pertenencia étnica o la religión que profesen. La ley garantiza la libertad personal de los alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje en los centros de formación y capacitación. Los centros garantizan la inviolabilidad de la dignidad personal de los alumnos y proscriben cualquier tipo de insulto o maltrato. Los centros funcionan en régimen de internado y permiten que los alumnos regresen a sus hogares con regularidad y soliciten permiso para ausentarse y atender asuntos personales. Asimismo, los alumnos pueden comunicarse libremente con el exterior. Se garantizan plenamente los derechos de los alumnos de todos los grupos étnicos a mantener sus costumbres y utilizar sus idiomas hablados y escritos, y se respetan su libertad religiosa y sus necesidades espirituales y culturales. Los centros de formación y capacitación emplean a maestros, instructores, médicos y funcionarios administrativos bilingües para garantizar que los internos puedan llevar una vida normal durante sus estudios. Para descargar a los alumnos de preocupaciones familiares, las autoridades de Xinjiang, en todos los niveles, aplican diversas medidas preferenciales en favor de las familias de los alumnos en materia de seguridad social, educación, servicios médicos y eliminación de la pobreza, en condiciones de igualdad, y ayudan a los familiares y parientes de los alumnos a hacer frente a problemas prácticos que pueden presentárseles en la vida cotidiana y esferas como el empleo, la educación y la salud, de modo que los alumnos puedan concentrarse en su formación y capacitación.

La experiencia práctica ha demostrado que la labor de educación y capacitación que se está llevando a cabo en Xinjiang ha logrado eliminar los factores y las condiciones propicias a la aparición y la propagación del terrorismo y el extremismo religioso, garantizando eficazmente los derechos a la vida, la salud y el desarrollo de las personas de todos los grupos étnicos de Xinjiang, lo cual no solo ha permitido lograr la estabilidad social en Xinjiang, sino también mantener eficazmente la seguridad y la estabilidad regionales. Este enfoque se ajusta plenamente al espíritu y los principios fundamentales de la comunidad internacional en materia de lucha contra el terrorismo y el extremismo, y está en plena consonancia con los intereses y las necesidades fundamentales de la población de todos los países.

1. Sobre las recomendaciones de “[Poner] fin a la práctica de recluir en centros de detención extralegales a personas que no hayan sido acusadas, juzgadas y condenadas por la comisión de un delito”, “[Poner] en libertad de inmediato a las personas actualmente detenidas en esas circunstancias y permit[ir] obtener una reparación a las personas reclusas irregularmente” e “[Indicar] el número de personas reclusas en contra de su voluntad en los centros de detención extralegales de la Región Autónoma de Xinjiang Uighur durante los últimos cinco años”

En el territorio de China, incluida la Región Autónoma de Xinjiang Uighur, no hay centros de detención extrajudiciales y tampoco ha habido casos de detención extrajudicial. El Código de Procedimiento Penal, la Ley de Indemnizaciones Estatales y otras leyes y reglamentos chinos contienen disposiciones estrictas sobre la reclusión penal y garantizan plenamente el derecho de los ciudadanos a la reparación.

Primero, el ámbito de aplicación de la reclusión penal está estrictamente definido. La reclusión penal es una medida coercitiva por la que los órganos de seguridad pública restringen temporalmente la libertad personal de los sospechosos de delitos y los ponen bajo custodia. Dichos órganos pueden aplicar esa medida a delincuentes en activo o sospechosos de haber cometido delitos graves únicamente en las circunstancias previstas en el Código de Procedimiento Penal.

Segundo, los órganos que deciden y aplican la reclusión penal están estrictamente regulados. Además de los órganos de seguridad pública, que están facultados para ordenar una reclusión penal y hacerla cumplir de conformidad con lo previsto por la ley, la Fiscalía Popular también puede ordenar una privación de libertad en relación con los casos que trata directamente, decisión que será ejecutada por los órganos de seguridad pública.

Tercero, los procedimientos de reclusión penal están estrictamente regulados. Toda reclusión penal ha de ser autorizada por un responsable de los órganos de seguridad pública, a nivel de distrito o a un nivel superior, que dictará la orden de detención correspondiente. En los casos atendidos por la Fiscalía Popular, corresponde al Fiscal General dictar las órdenes de detención. Salvo en los casos en que la notificación del delito o la participación en una actividad terrorista sea imposible o comprometa la seguridad nacional o dificulte la investigación, se informará a los familiares del interesado a más tardar 24 horas después del comienzo de la detención. Las personas detenidas serán interrogadas por los órganos de seguridad pública en las 24 horas siguientes a su detención. Si se establece que no es necesario que sigan privadas de libertad, deberán ser puestas en libertad inmediatamente y se les expedirá el certificado correspondiente.

Cuarto, las personas en reclusión penal tienen acceso a vías de recurso. El Código de Procedimiento Penal garantiza los derechos de los detenidos a preparar su defensa, interponer recursos e iniciar acciones judiciales. El presunto delincuente tiene derecho a designar a un abogado para su defensa desde el inicio de su detención. Si no puede contratar a un abogado por falta de recursos económicos u otros motivos, esa persona o sus familiares cercanos pueden acudir a un organismo de asistencia jurídica. Los sospechosos y sus abogados tienen derecho a solicitar la revisión de las medidas coercitivas adoptadas en su contra, así como a presentar quejas e iniciar acciones judiciales contra los órganos del poder judicial y su personal en caso de que estos hayan vulnerado la ley. La Ley de Indemnizaciones Estatales establece que un ciudadano tiene derecho a obtener reparación del Estado si es detenido en violación de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal o si, siendo su detención conforme a lo previsto en este, su duración excede del plazo máximo establecido, si la causa se cierra, si se retiran los cargos formulados en su contra o si se lo absuelve de responsabilidad penal.

Existen instalaciones específicas para la reclusión penal, que está sujeta a supervisión legal. De conformidad con el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, toda persona detenida ha de ser trasladada a un centro de detención en las 24 horas siguientes. De conformidad con el reglamento de centros penitenciarios, dichos centros están destinados a las personas de las que se sospecha que han cometido un delito y que son detenidas y reclusas de conformidad con lo previsto por la ley. Con arreglo a la legislación nacional, se garantiza la seguridad de esas personas que han de estar vigiladas por policías

armados. En todos los casos ha de presentarse un certificado de reclusión penal, expedido por un órgano de seguridad pública de nivel distrital o superior. Si falta dicho certificado o si el contenido que figura en él difiere de los hechos de la situación, la persona detenida será puesta en libertad. Las funciones de vigilancia de los centros de detención están sujetas a la supervisión legal de la Fiscalía Popular.

2. Con respecto a las alegaciones de que se elaboran perfiles criminológicos por razones raciales, étnicas y etnicorreligiosas

De conformidad con la Constitución y las leyes chinas, todos los ciudadanos de la República Popular China son iguales ante la ley. La ley se aplica por igual a todas las personas que cometan un delito: se las investiga y se les exigen responsabilidades penales, con independencia de su etnia, su raza, su sexo, su ocupación, su origen familiar, sus creencias religiosas, su nivel de educación, su situación financiera o el tiempo que lleven residiendo en el país. La legislación nacional garantiza el derecho de los ciudadanos a iniciar acciones judiciales y otros derechos e intereses legítimos y prohíbe la discriminación en todas sus formas.

3. Respeto de la recopilación, el análisis y el procesamiento de datos e información personales

China protege la información personal y la privacidad de los ciudadanos de conformidad con la ley. Se ha promulgado un conjunto de leyes, reglamentos, interpretaciones judiciales y normas nacionales a ese respecto, con el fin de reforzar en forma duradera la protección de la información personal de los ciudadanos y reprimir toda utilización indebida de esos datos.

En el ámbito del derecho civil, el artículo 111 del Código Civil establece que la información personal de las personas naturales está protegida por ley. Toda organización o persona que necesite obtener la información personal de un tercero debe garantizar la seguridad de esa información, de conformidad con la ley. Está prohibido recopilar, utilizar, procesar, transmitir, comprar, vender o divulgar ilegalmente la información personal de un tercero.

En el ámbito del derecho penal, en 2009 se modificó el Código Penal (Enmienda VII) para tipificar los delitos de venta o suministro ilegal de información personal y obtención ilegal de ese tipo de información. En 2015, se aportaron nuevas mejoras al Código Penal con la Enmienda IX, en la que se agruparon esos dos delitos en uno solo, descrito como violación de la información personal. Se amplió el ámbito de aplicación y la definición de este delito, que ahora se castiga con pena de tres a siete años de cárcel. En 2017 el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía Suprema Popular publicaron una interpretación conjunta de varias cuestiones sobre la aplicación de la ley en las causas penales relativas a la violación de la información personal, en la que se indicaba en qué consistía la información personal y se tipificaba con más detalle el delito de violación de esa información y se fijaban las penas correspondientes.

Por cuanto respecta a la gestión de la seguridad de la información personal, la Ley de Ciberseguridad, de 2016, otorga gran importancia a la protección de la información personal. La Ley regula de manera exhaustiva y sistemática la recopilación y la utilización de la información personal y refuerza la responsabilidad relativa a la protección de los datos recogidos y utilizados. En 2017 el Comité Técnico Nacional de Normalización de la Seguridad de la Información publicó normas relativas a la seguridad de la información personal que se aplican a las actividades de procesamiento de los datos personales realizadas por diversas organizaciones. Estas normas regulan las actividades de los encargados de recopilar, almacenar, utilizar, compartir, transmitir y utilizar la información personal y están destinadas a impedir la recopilación, la utilización indebida y la divulgación ilegales de información personal y a proteger lo más posible los derechos e intereses legítimos de los particulares, así como los intereses sociales y públicos.

4. Con respecto a las supuestas restricciones a los viajes que afectan de manera desproporcionada a los miembros de las minorías étnicas

El Gobierno de la China protege los derechos e intereses legítimos de todo ciudadano que salga o entre en su territorio. Los ciudadanos chinos que deseen salir del país deben solicitar un pasaporte u otro documento de viaje, de conformidad con la ley. La Ley de Pasaportes y la Ley de Administración de Entradas y Salidas y otras leyes y reglamentos contienen disposiciones detalladas relativas a las solicitudes de pasaportes y las cuestiones relativas a las entradas y salidas del territorio y definen claramente los casos en que las autoridades pueden negarse a expedir un pasaporte e impedir que un ciudadano salga del país, así como las vías de recurso disponibles en casos de ese tipo. De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Pasaportes, se puede denegar la expedición de un pasaporte si la solicitud no cumple los requisitos establecidos. La Administración de Entradas y Salidas, que depende del órgano de seguridad pública, debe exponer por escrito los motivos de la denegación e informar al solicitante de su derecho a solicitar una revisión administrativa o iniciar un procedimiento administrativo de acuerdo con lo previsto por ley.

5. Respeto de la recomendación de divulgar la ubicación y la situación actuales de los estudiantes, refugiados y solicitantes de asilo uigures que hayan regresado a China en virtud de una solicitud formulada por el Estado parte en los cinco últimos años

En los últimos años, se ha observado con mayor frecuencia que hay personas que, incitadas por las organizaciones terroristas del “Turquistán Oriental”, salen de China ilegalmente para participar en la “yihad”. Muchas de estas personas han sido manipuladas por extremistas religiosos y engañadas por organizaciones terroristas extranjeras del “Turquistán Oriental” que las obligan a salir de China, lo cual constituye una grave amenaza para la seguridad nacional y la de los países vecinos, así como para el control de las fronteras. Para hacer frente a este fenómeno, las fuerzas del orden de China, en cooperación con los países interesados, llevan a cabo operaciones de extradición o repatriación de conformidad con la ley, en forma segura y ordenada y adaptándose a las distintas situaciones. Las personas víctimas del extremismo religioso que han sido manipuladas y reclutadas por la fuerza, reciben ayuda y pueden acogerse a un programa de reasentamiento, educación y conversión, mientras que las personas sospechosas de haber salido del país para unirse a organizaciones terroristas o huir de la justicia son castigadas severamente, de conformidad con lo previsto por la ley. El Gobierno de China garantiza los derechos legítimos de las personas que llegan al país tras haber sido extraditadas o repatriadas y tramita sus casos de conformidad con la ley.

C. Respeto de la recomendación de “proporcionar datos sobre la promoción de los idiomas de las minorías étnicas y las posibles restricciones impuestas a su utilización”

El Gobierno de China garantiza el derecho de las minorías étnicas a utilizar y promover sus idiomas hablados y escritos de conformidad con la ley. Cerca de 40 leyes y reglamentos contienen disposiciones sobre el uso y la promoción de las lenguas minoritarias por las minorías étnicas; entre ellas figuran la Constitución, la Ley de Regiones Autónomas, la Ley de Educación y la ley relativa a la forma escrita y hablada de la lengua china estándar. El Gobierno garantiza la utilización de las lenguas minoritarias en la justicia administrativa, la prensa escrita, la radio, la televisión, el cine, la cultura, la educación y otros ámbitos. En reuniones importantes, como el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el Congreso Nacional del Pueblo y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, se prestan servicios de traducción e interpretación simultánea en mongol, tibetano, uighur, kazajo, coreano, yi, zhuang y otras lenguas minoritarias. China está consolidando la infraestructura regional de radio y televisión y ha incorporado el objetivo de ejecutar importantes proyectos de radio y televisión públicas en varias estrategias nacionales de alivio de la pobreza especialmente destinadas a regiones fronterizas habitadas por minorías étnicas como Qinghai, Xinjiang y el Tíbet, al tiempo que promueve energicamente la introducción de los servicios públicos de radio y televisión en los pueblos

y los hogares de esas regiones. Gracias a equipos de recepción de transmisiones por satélite, los agricultores y los pastores de regiones montañosas alejadas y zonas fronterizas de difícil acceso por carretera pueden mirar y escuchar más de 50 cadenas de radio y televisión de alta definición. En 2017 se doblaron en idiomas minoritarios de todo el país unas 122.000 horas de programación radiofónica y 42.000 horas de programación televisiva; en 11 centros de doblaje en lenguas minoritarias nacionales se doblaron 1.104 películas y se atendieron en total más de 210.000 pedidos. La programación en lenguas minoritarias nacionales se enriquece día a día y el informativo nacional, transmitido por la Radio Nacional de China en cinco lenguas minoritarias, también está en línea. Los centros de doblaje modernizan los medios de doblaje de las producciones audiovisuales, organizan cursos de capacitación y cooperan con instituciones sociales para formar especialistas en el doblaje en los idiomas de las minorías nacionales.

El Gobierno chino otorga gran importancia al estudio, la utilización y la promoción de la lengua tibetana, y garantiza seriamente la libertad del pueblo tibetano de utilizar y promover su lengua hablada y escrita. En la actualidad, los idiomas tibetano y chino hablados y escritos se utilizan en todas las leyes, reglamentos, resoluciones y documentos oficiales, así como en los periódicos, revistas y programas de radio y televisión de la Región Autónoma del Tíbet y otras zonas autónomas tibetanas. Se ha establecido en el Tíbet un sistema educativo completo, desde el jardín de infancia hasta la universidad, que garantiza el derecho a la enseñanza en idioma tibetano. Cada año, la Región Autónoma del Tíbet publica más de 100 libros en lengua tibetana, de los que se imprimen tiradas de cientos de miles de ejemplares. Asimismo, el Tribunal Popular forma a jueces bilingües que dominan el chino y el tibetano en centros de formación situados en Lhasa (Región Autónoma del Tíbet) y en el distrito de Zhouqu (Prefectura Autónoma Tibetana de Gannan, provincia de Gansu), entre otros lugares. La Fiscalía Popular ha establecido en Linzhi (Región Autónoma del Tíbet) un centro de formación bilingüe en chino y tibetano destinado a la formación de fiscales bilingües, con el objetivo de facilitar los trámites a los ciudadanos tibetanos que deseen utilizar su propio idioma en los procedimientos judiciales. Además, la lengua tibetana ha entrado en la era de la información, ya que la codificación de los caracteres tibetanos se ajusta ahora a las normas nacionales e internacionales. Así pues, la lengua tibetana es la primera lengua minoritaria de China conforme a las normas internacionales. El idioma tibetano ha pasado además a ser una lengua de uso común en Internet.

El Gobierno chino espera que sus respuestas ayuden al Comité a hacerse una idea precisa y objetiva de las medidas adoptadas por China para eliminar la discriminación racial y de los avances logrados en este ámbito. China desea proseguir su cooperación y sus intercambios con el Comité, en condiciones de igualdad y respeto mutuo, con el fin de seguir mejorando el disfrute de todos los derechos humanos por las personas que pertenecen a minorías étnicas.
